

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En autos Rit O-59-2019, Ruc 1940016170-7, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, caratulados "Tapia con Municipalidad de La Pintana", por sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se acogió la demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones deducida por don Jimmy Robinson Tapia Mesías, declarando que existió una relación laboral entre el actor y la Municipalidad demandada, desde el día 1 de marzo de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, se declaró que el despido fue carente de causal legal, por lo que se condenó a la demandada al pago de indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio con el incremento legal del cincuenta por ciento, junto a las prestaciones que indica, más reajustes e intereses; rechazándose la demanda de nulidad del despido y el cobro de cotizaciones adeudadas durante el periodo en que se declaró la existencia de la relación laboral.

Las partes dedujeron en contra de dicho fallo recursos de nulidad. En lo que interesa, el demandante lo fundó en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo y artículos 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500, porque a pesar de reconocerse la relación laboral existente entre las partes, en la sentencia no se ordenó el pago de las cotizaciones previsionales por todo el periodo trabajado; e incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo al desestimar la demanda de nulidad del despido.

Una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, rechazó los recursos de nulidad.

Respecto de dicha decisión la parte demandante dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo unificando jurisprudencia, con costas.

Se ordenó traer estos autos a relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una



relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que las materias de derecho objeto del juicio que el recurrente solicita unificar, dicen relación con la procedencia del pago de las cotizaciones previsionales correspondiente al periodo que se mantuvo vigente la relación laboral y, por otro lado, la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, cuando en la sentencia se declara la existencia de la relación laboral respecto de trabajadores que se desempeñaron a honorarios en una Municipalidad.

Señala que es erróneo lo decidido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en cuanto rechazó el recurso de nulidad que interpuso, al estimar que no es procedente el pago de las cotizaciones previsionales durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y, asimismo, la aplicación de la sanción de nulidad del despido cuando la existencia de la relación laboral se establece recién en la sentencia, y la empleadora no retuvo de las remuneraciones la parte correspondiente para el pago de las cotizaciones, opinión que contradice el criterio jurisprudencial sostenido por esta Corte en las sentencias dictadas en los autos roles números 11.419-2019, 45.842-2016, 100.836-2016, y el dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el Rol N° 467-2018, cuyas copias acompaña para su contraste.

Solicita se acoja su recurso y se dicte sentencia de reemplazo unificando jurisprudencia en los términos señalados.

**Tercero:** Que la decisión impugnada resolvió la controversia argumentando que *“...a cuestión que motiva el recurso de nulidad señalado, ya ha sido zanjado por la Excm. Corte Suprema (rol 43.773-2017, Cuarta Sala) en cuanto resolvió, en lo pertinente, que respecto a lo pretendido por el actor por concepto de nulidad del despido y la correspondiente alegación de enterar las cotizaciones previsionales por el período trabajado, el tribunal efectivamente lo que hace es constatar una situación preexistente, y debe entonces, en principio, entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales están vigentes desde que comenzaron a cancelarse las remuneraciones por el empleador. Pero no obstante lo anterior, tratándose, en su origen, de contratos o convenios-cómo ocurre en autos- celebrados por órganos de la Administración del Estado, -en los*



*términos del artículo 1° de la Ley 18.575- concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución cuál es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en un principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la institución de la nulidad del despido, y por ello aplicar la norma del artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, ya que los órganos del Estado (en este caso la Municipalidad de La Pintana) no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, requieren para ello, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava de forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido”.*

Finalmente, concluyó que “...esta línea argumental, también compartida por el juez a quo, lleva a concluir que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación se establece con un órgano de la administración del Estado y, consecuentemente la norma del artículo 162, por las razones ya dichas y, por ende, habiéndose aplicado correctamente las disposiciones legales denunciadas en el recurso, éste no puede prosperar y será rechazado, tanto su causal principal como por las subsidiarias”, desestimando la pretensión de pago de las cotizaciones previsionales durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y la sanción de nulidad de despido.

**Cuarto:** Que la sentencia acompañada para la comparación de la materia de derecho relativa al pago de las cotizaciones previsionales de un trabajador contratado a honorarios en una Municipalidad en la que se reconoce la existencia de una relación laboral, correspondiente al ingreso N° 11.419-2019 dictada por esta Corte, expresa que “...que el artículo 58 expresa que “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”. Dicho descuento, que afecta las remuneraciones de los trabajadores, tiene el carácter de obligatorio conforme lo regula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, que expresa que “Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”. Deber que se ve reforzado por el tenor expreso del artículo 19 de



dicho estatuto, que previene: “Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”. El inciso segundo de la misma disposición agrega: “Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”.

Finalmente, concluye que “...nuestro ordenamiento considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales, corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que la ley fija. Por otro lado, dicha naturaleza imponible de los haberes son determinados por el legislador, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, atendido la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos, desde que se comenzaron a pagar remuneraciones”.

En el mismo sentido se pronuncia el fallo correspondiente al ingreso N° 467-2018, dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

**Quinto:** Que en lo que se refiere a la materia de derecho relativa a la sanción de nulidad del despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, se acompañó como contraste la sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol N°45.842-2016, que, en lo que interesa, señala que “...que la razón que motivó al legislador para modificar el artículo 162 del Código del Trabajo, por la vía de incorporar, por el artículo N° 1, letra c), de la Ley N° 19.631, el actual inciso quinto, fue proteger los derechos previsionales de los trabajadores por la insuficiencia de la normativa legal en materia de fiscalización, y por ser ineficiente la persecución de las responsabilidades pecuniarias de los empleadores a través del procedimiento ejecutivo; cuyas consecuencias negativas en forma indefectible las experimentan los trabajadores, en especial los más modestos, quienes ven burlados sus derechos previsionales, y, por ello, en su vejez no les queda otra posibilidad que recurrir a las pensiones asistenciales, siempre insuficientes, o a la caridad; sin perjuicio de que, además, por el hecho del despido quedan privados de su fuente laboral y, por lo mismo, sin la posibilidad de solventar sus necesidades y las de su grupo familiar”.



Asimismo, señaló que "...además, el mismo cuerpo legal al determinar el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula que: "Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...". El inciso segundo de la misma disposición agrega: "Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...". Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, que es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

...De esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y ésta se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo".

Finalmente, concluyó que "...a lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada en estos autos no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde la época en que comenzaron a pagarse las remuneraciones por el empleador. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo denuncia con el objeto que se declarara, además de lo indebido del despido, que fue nulo e ineficaz porque las cotizaciones de seguridad social no habían sido pagadas, a lo que no se accedió. Se constató o declaró su existencia, pero en ningún caso se constituyó, puesto que no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la fecha que se indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la acordaron. Cosa distinta es que una de ellas se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de esa relación jurídica laboral se desprenden, las que el tribunal de la instancia



*especificara en su sentencia, condenando a la demandada a su pago; sanción que tiene por antecedente el reconocimiento del derecho que asiste al actor, el cual también ha sido declarado”.*

De la misma forma es resuelta la controversia en los autos Roles N° 100.836-2016 y N° 39.406-2017, dictados por esta Corte y también acompañados como cotejo.

**Sexto:** Que, como se observa, se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de Tribunales Superiores de Justicia respecto de las materias de derecho debatidas, por lo que procede unificar jurisprudencia, conforme el criterio que esta Corte estima correspondiente.

En dicho contexto, y en relación con la materia relativa a la sanción contemplada en los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del estatuto laboral, resulta útil expresar que la materia objeto de la litis ya fue conocida por esta Corte según dan cuenta sentencias dictadas en las causas roles números 4.1500-2017; 37.339-2017; 36.601-2017 y últimamente en los Roles 28.229-2018, 4.440-2019 y 4.515-2019, entre otras, en las que se unificó la jurisprudencia en el sentido que, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

**Séptimo:** Que siendo indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, -siendo impropio y jurídicamente errado asignarle, como lo hace la decisión impugnada, un carácter constitutivo según la condición pública del sujeto contratante, pues tal cuestión no depende de la naturaleza jurídica que ostenten las partes, sino del contenido del pronunciamiento judicial-, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, constatada la circunstancia fáctica de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base.



**Octavo:** Que, por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

**Noveno:** Que, de este modo, esta nueva comprensión doctrinal del tema lleva necesariamente a concluir que el fallo impugnado coincide con la conclusión arribada, esto es, que procedía desestimar el recurso de nulidad del demandante en esta parte del punto traído a discusión, manteniendo el rechazo de la pretensión del recurrente de aplicar a la demandada la sanción de la nulidad de despido, pues la correcta interpretación de la materia objeto del juicio, conforme se expuso, lleva a la misma decisión, siendo forzoso, por tanto, el rechazo del presente arbitrio en este capítulo.

**Décimo:** Que, por otra parte, en lo que atañe a la pretensión del trabajador referida al pago de las cotizaciones previsionales durante el período que se mantuvo vigente la relación laboral, cabe señalar que, tal como fue resuelto por esta Corte con fecha 11 de julio de 2018 en los autos Rol N° 42.973-2017, el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*.

Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, al indicar: *“Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”*.



Además, el mismo cuerpo legal al establecer el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula: *“Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”*. El inciso segundo de la misma disposición agrega: *“Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”*.

Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

**Undécimo:** Que, de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos.

A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto que se condenara a la demandada, además de declarar el despido improcedente, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habían sido solucionadas, a lo cual no se accedió.

Sin embargo, conforme a lo razonado, debió accederse a dicha pretensión, pues por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia de la relación laboral, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de conformidad con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago, de tal modo que





al decidirse como se hizo en el pronunciamiento del grado, se incurrió en la vulneración del artículo 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500.

Sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la parte demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a las normas legales indicadas, debió ser acogido y anulada la sentencia del grado, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

**Duodécimo:** Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la referida materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido parcialmente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se acoge parcialmente** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante contra la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en cuanto rechazó el recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500, que interpuso contra la sentencia de base de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel en los autos Rit O-59-2019, Ruc 1940016170-7, y se declara que es nula, en cuanto desestimó la demanda de cobro de las cotizaciones de seguridad social impagas durante el período que estuvo vigente la relación laboral, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Regístrese.

N° 41.151-2019.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Haroldo Brito C., señora Andrea Muñoz S., ministro suplente señor Mario Gómez M., y las abogadas integrantes señoras María Cristina Gajardo H., y Carolina Coppo D. No firma el ministro señor Brito y el ministro suplente señor Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno.



ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 13/09/2021 13:36:32

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 13/09/2021 13:36:33

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 13/09/2021 13:42:48



SWLRWFXKGH

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia del grado, con excepción de sus motivaciones decimoquinta y decimoséptima, que se eliminan.

Asimismo, se reproducen las argumentaciones sexta a undécima de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

**Y se tiene en su lugar y, además, presente:**

**Primero:** Que habiéndose constatado o declarado la existencia de la relación laboral, y encontrándose establecido que la empleadora adeuda las cotizaciones de seguridad social del actor, corresponde condenarla al entero de las cotizaciones adeudadas durante la vigencia de la relación laboral que se tuvo por acreditada.

**Segundo:** Que las reflexiones anteriores conducen a acoger, además de la acción por despido injustificado, la de cobro de cotizaciones de seguridad social.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 11 de la Ley N° 18.883; artículos 1665 y siguientes del Código Civil; artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 41, 44, 63, 159, 160, 161, 168, 173, 420, 425, 456, 459 y 510 del Código del Trabajo, **se declara** que:

**I.- Se mantienen las decisiones signada con los numerales I a VII de la parte resolutive** del fallo de primera instancia.

**II.- Se condena** a la demandada a enterar las cotizaciones de seguridad social por todo el período trabajado entre el 1 de marzo de 2006 al 31 de diciembre de 2018.

**III.- Se rechaza** la demanda de nulidad del despido.

**IV.-** No se condena en costas a la demandada, por no ser totalmente vencida y considerar que ha tenido motivo plausible para litigar.

Ejecutoriada que se encuentre la sentencia, cúmplase con lo que dispone dentro de quinto día. Pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional correspondiente.

Regístrese y devuélvase.

N° 41.151-2019.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Haroldo Brito C., señora Andrea Muñoz S., ministro suplente señor Mario



Gómez M., y las abogadas integrantes señoras María Cristina Gajardo H., y Carolina Coppo D. No firma el ministro señor Brito y el ministro suplente señor Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 13/09/2021 13:36:34

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 13/09/2021 13:36:34

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 13/09/2021 13:42:49



En Santiago, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

